

SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA.

**RECURSO DE REVISIÓN: 0647/2017
EXPEDIENTE: 0310/2016 DE LA CUARTA SALA UNITARIA DE PRIMERA INSTANCIA**

MAGISTRADO PONENTE: HUGO VILLEGAS AQUINO

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

Por recibido el Cuaderno de Revisión **0647/2017**, que remite la Secretaría General de Acuerdos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por ***** actora del juicio natural, en contra de la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete dictada por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, en el juicio de nulidad **0310/2016** promovido por el **RECURRENTE** en contra de la **DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA**, por lo que con fundamento en los artículos 207 y 208 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se admite. En consecuencia, se procede a dictar resolución en los siguientes términos:

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Inconforme con la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete dictada por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia de este Tribunal en el juicio de nulidad **0310/2016**, ***** actor en el juicio principal, interpone en su contra recurso de revisión.

SEGUNDO. Los puntos resolutiveos de la resolución recurrida son como sigue:

“...

PRIMERO.- Esta Sala fue competente para conocer y resolver del recurso de queja.

SEGUNDO.- Se declara **IMPROCEDENTE LA QUEJA** interpuesta por ***** , por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.

TERCERO.- Una vez que cause estado la presente resolución, se ordena dar de baja del libro de control de expedientes que lleve esta Sala Unitaria y archivar el presente como total y definitivamente concluido.

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS.

con fundamento en los (sic)..."

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114 QUÁTER, Párrafo Tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Cuarto y Décimo Transitorios del Decreto número 786 de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, así como los diversos 86, 88, 92, 93, fracción I, 94, 201, 206 y 208, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, dado que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto en contra de la parte relativa de la resolución de siete de julio de dos mil diecisiete dictada por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia en el expediente **0310/2016**.

SEGUNDO. Los agravios hechos valer se encuentran expuestos en el escrito respectivo del recurrente, por lo que no existe necesidad de transcribirlos, al no transgredírsele derecho alguno, como tampoco se vulnera disposición expresa que imponga tal obligación.

<p>Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO</p>
--

TERCERO. Previo a la resolución del presente asunto se acota, que la resolución que se controvierte es la relativa a aquella que resolvió el recurso de queja interpuesto por el hoy disconforme, en contra del cumplimiento de la sentencia definitiva. En términos del artículo 206 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca¹ es improcedente el recurso de revisión interpuesto en contra

¹ "Artículo 206.- Contra los acuerdos y resoluciones dictados por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior.

de la resolución que resuelve el recurso de queja, empero, dado que en TERCER punto resolutivo de la resolución de 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete el magistrado de la primera instancia resolvió, que una vez que la citada resolución haya causado ejecutoria el expediente natural debía darse de baja del libro de control y ordenar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, entonces, con esta determinación, la sala de origen ha puesto fin al procedimiento de ejecución de sentencia, de ahí, que se admita a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución de 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete en términos de lo estatuido por el dispositivo 206 fracción VIII de la Ley de Justicia Administrativa para el estado de Oaxaca.

Ahora, en sus motivos de disenso indica que se agravia de la resolución que resolvió el recurso de queja, por la errada decisión de la primera instancia al tener al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado cumpliendo con la sentencia pronunciada en el juicio natural y por ende declarando improcedente la queja, porque se contraviene lo dispuesto por la fracción II del artículo 177 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, dice al no fundar y motivar su resolución, porque afirma que sin realizar un análisis puntual y jurídico del *cumplimiento de la sentencia* (énfasis nuestro), admite indebidamente el contenido del artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y del Acuerdo publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de 22 veintidós de agosto de dos mil doce en el que se reforma el artículo 95 Bis de la Ley de Tránsito Reformada, como fundamentos de la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado para resolver lo relativo a la renovación de su acuerdo de concesión.

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

-
- I.- Los acuerdos que admitan o desechen la demanda, su contestación o ampliación;
 - II.- El acuerdo que deseche pruebas;
 - III.- El acuerdo que rechace la intervención del tercero;
 - IV.- Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen la suspensión;
 - V.- Las resoluciones que decidan incidentes;
 - VI.- Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento;
 - VII.- Las sentencias que decidan la cuestión planteada. Por violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; y
 - VIII.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia”

Afirma, que contrario a lo resuelto por la Sala de origen el Secretario de Vialidad y Transporte no es autoridad competente para dictar la resolución en el sentido de que no ha lugar a otorgar la renovación de su acuerdo de concesión, porque ninguna norma lo faculta para hacer tales actos, y sostiene que ello se desprende de la lectura que se haga del artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. (lo transcribe)

Explica que con base en dicho precepto jurídico el Secretario de Vialidad y Transporte sólo tiene facultades para conocer, iniciar e instruir los trámites para otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar, prorrogar, renovar, aprobar y dar por terminadas las concesiones, permisos y autorizaciones, las cuales finalmente otorgará el Titular del Poder Ejecutivo. Agrega que conforme al citado precepto legal, el comentado secretario tiene facultades para iniciar los procedimientos administrativos, conocer de los mismos e instruirlos, es decir, de realizar todas y cada una de las etapas del procedimiento cuidando que se respeten las formalidades y términos legales y se cumplan los requisitos establecidos, pero que no le otorga facultades para resolver el fondo de los citados procedimientos. También dice que el comentado artículo 40 fracción IV no confiere al secretario de mérito a resolver de fondo lo relativo al otorgamiento, revocación, cancelación, suspensión, modificación, prórroga, renovación, aprobación y terminación de las concesiones, debido a que sólo tiene facultad para instruir tales procedimientos y colocarlos en estado de resolución.

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

Como parte de sus inconformidades alude a un concepto del vocablo instruir, dice, otorgado por la Real Academia de la Lengua Española, y afirma que dicho concepto se adecua exactamente a la naturaleza jurídica del procedimiento, en el cual la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en indicar que existen etapas perfectamente diferenciadas, a saber: a) la de instrucción que abarca todos los actos procesales y b) la de conclusión o resolución. Que la instrucción a su vez, contiene tres etapas: 1. postulatoria o expositiva, b. probatoria y c. preconclusiva. De todo esto, insiste en que el Secretario de Vialidad y Transporte tiene facultad para atender cuestiones substanciales o incidentales relacionadas con la renovación

de la concesión pero no para resolver si esta debe otorgarse o no, que el numeral 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado sí faculta al Secretario para intervenir en todas las etapas relacionadas con la instrucción, pero no llega hasta el punto de facultarle para resolver o concluir el procedimiento de renovación de concesión.

Debido a todo esto, sostienen, es que existe un yerro en la decisión de la primera instancia en la que se decretó la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte por lo que dicen, debe revocarse la resolución alzada y requerir al citado secretario para que dé cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, esto debido a que conforme a las constancias judiciales se puede apreciar que ha transcurrido en exceso el tiempo para el cumplimiento de la sentencia definitiva en detrimento del aquí disconforme. Como sustento de estos argumentos cita los criterios de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEL PROMOVIDO ANTE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CONTRA RESOLUCIONES DEFINITIVAS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE FUNDEN EN UN TRATADO O ACUERDO INTERNACIONAL PARA AVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN, O EN MATERIA COMERCIAL, SUSCRITO POR MÉXICO, O CUANDO EL DEMANDANTE ADUZCA LA FALTA DE APLICACIÓN DE ALGUNO DE ÉSTOS EN SU FAVOR, DEBE SER RESUELTO POR LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DE DICHO ÓRGANO" y "SERVIDORES PÚBLICOS. EL LEGISLADOR EMPLEÓ COMO SINÓNIMOS LAS PALABRAS "INSTAURAR" Y "SUSTANCIAR" EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, INCISO A) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 16 DE JULIO DE 2001".

Más adelante, refiere que la resolución alzada carece de fundamentación y motivación y que con ello se contraviene lo dispuesto por el artículo 177 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, porque no se establece de manera puntual e inequívoca las normas jurídicas y los razonamientos jurídicos que sustenten el Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del

Estado el 4 cuatro de septiembre de 20125 dos mil doce, en el que se otorgue al Secretario de Vialidad y Transporte la facultad para resolver respecto a su solicitud de renovación de concesión.

Repite, que la sala de origen incurre en un error al determinar que el Secretario de Vialidad y Transporte es autoridad competente para dictar resolución en el sentido de no haber lugar a otorgarle la renovación de su concesión. Y, en este punto, refiere que el citado secretario pretende fundar su competencia en un Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce, expedido por el Gobernador del Estado y el cual ha sido derogado por la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca y por la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca. Que el Acuerdo delegatorio no reforma el artículo 95 bis de la Ley de Transporte del Estado (lo transcribe), que ésta última ley fue promulgada el 12 doce de noviembre de 2013 dos mil trece e inició su vigencia el 10 diez de marzo de 2014 dos mil catorce, conforme al artículo primer transitorio.

Además que la Ley de Transporte del Estado en los artículos 72 último párrafo y 120 fracción III prevén la figura de la prórroga o renovación de las concesiones de transporte público, estableciendo en el artículo 12 fracción V de la citada ley que es atribución del Gobernador del Estado expedir el acuerdo de prórroga o renovación de concesión, esto porque señala que es una atribución del Jefe del Ejecutivo Local expedir acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización y regulación del servicio público de transporte. Y, como soporte de estos argumentos transcribe el artículo 12, fracción V de la referida ley. De esta manera, asegura, que como la Ley de Transporte indica que es facultad del Gobernador conocer y resolver sobre renovación o prórroga de las concesiones de transporte público, entonces se deroga cualquier disposición igual o de menor rango que establezca algo distinto, opuesto o contradictorio, como sucede con el Acuerdo Delegatorio en comento. Así sostiene que el Acuerdo Delegatorio de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce ha sido derogado por disposición expresa del segundo párrafo del segundo artículo transitorio de la Ley de Transporte para el Estado de Oaxaca en virtud de ser una

disposición administrativa de menor rango que la ley y además contener disposiciones opuestas al artículo 12 fracción V en relación con los diversos 72 último párrafo y 120 fracción III de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, de ahí que no pueda ser invocado como sustento del fundamento de la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte para resolver sobre la renovación de las concesiones.

Señala que el Acuerdo Delegatorio de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce ha dejado de tener vigencia y por ende es inaplicable como fundamento de la autoridad de transporte. También repite que conforme a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca vigente desde el 12 doce de abril de 2016 dos mil dieciséis en tanto no se expida el Reglamento de la referida ley, continuará en lo que no se oponga el Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada. Por lo que, el artículo 95 bis del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada, ha sido derogado por los artículos segundo, séptimo y octavo transitorios al oponerse al contenido del artículo 13 fracción III de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca el cual señala que son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo, las demás que le confiera la ley, como por ejemplo las contenidas en el artículo 12 fracción V de la Ley de Transporte, las relacionadas a expedir acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización y regulación del servicio público de transporte, dentro de las que se encuentra, claramente, la renovación o prórroga de las concesiones de transporte público.

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

También indica en sus inconformidades que le agravia la resolución alzada porque existe confusión en los puntos controvertidos y por ende, la sala de origen llega a conclusiones erróneas e ilegales, por lo que se contraviene lo estatuido en el artículo 177 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el cual obliga a que las sentencias contengan una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos.

Esto porque dice que en el recurso de queja intentado es relativo a la falta de cumplimiento por parte de la autoridad demandada, dice,

Secretario de Vialidad y Transporte, respecto de la sentencia de fondo, la cual versó sobre la nulidad del oficio SEVITRA/DC/DCR/3037/2013 emitido por la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte para efecto de que la autoridad demandada dictara otro acto debidamente fundado y motivado en cuanto a las facultades que dice tener para hacerlo, lo que, sostiene, conlleva a que la autoridad competente, que dice es el Gobernador del Estado, sea quien resuelva sobre su petición de renovación de concesión.

Señala que en concreto, su petición está dirigida a la autoridad administrativa para obtener la renovación de su concesión de transporte público, sin embargo, continúa, la primera instancia, al resolver la queja interpuesta por incumplimiento de la sentencia, determinó, que la resolución del Secretario de Vialidad y Transporte en cumplimiento a la ejecutoria de fondo está debidamente fundada y motivada, de donde se evidencia la falta de congruencia entre lo solicitado por el administrado y lo resuelto por la juzgadora.

Finaliza sus inconformidades indicando que la resolución en análisis carece de fundamentación y motivación y por tanto, que se vulnera lo dispuesto por el artículo 177 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y al efecto, transcribe la parte de la resolución que estima le agravia. Continúa diciendo que la sala de origen no señala los preceptos legales en que base su decisión de considerar que es correcto que la autoridad demandada declare que no es procedente conceder la concesión a la parte actora, además que tampoco expresa los razonamientos lógico jurídicos que concreten individualización y particularicen normas generales abstractas e impersonales, dado que se limita a citar los artículos 40 fracciones I, II, III, IV, IX, XXI, tercero y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, 5, 6, 21, 26, 29, 35, 44, 66, 68, 78 y 87 de la Ley de Transporte del Estado, 95 bis de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Local. (los transcribe)

Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO

Añade que la resolutoria primigenia es omisa en señalar los artículos transitorios a que se refiere cuando la Ley Orgánica tiene

varios capítulos transitorios como reformas ha sufrido, pero que sí se refirió a los transitorios del decreto de 29 veintinueve de noviembre de 2010 dos mil diez y que hubiera advertido que no cuenta con nueve transitorios. Para abundar en sus manifestaciones, transcribe los citados preceptos legales, así como el arábigo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

Concluyendo que, ninguno de tales preceptos normativos es puntualmente aplicable al caso, en principio porque no está solicitando la expedición de una concesión de transporte público, porque lo que está solicitando en el juicio natural y repercute en la ejecución de la sentencia es la renovación de su acuerdo de concesión que ya le fue expedida y de otra parte, porque como afirma que ya lo argumentó, el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado es incompetente para resolver sobre su petición de renovación de concesión de transporte público.

Así, en mérito de los anteriores sintetizados agravios, es pertinente indicar lo siguiente:

El recurso de Queja interpuesto, conforme a lo previsto por el artículo 202 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca², puede interponerse en contra de los actos de las autoridades demandadas por repetición del acto o resolución anulada o bien por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada. Además, exige que en el escrito de interposición del recurso de queja, se expresen las razones por las que se considere que existe repetición del acto o resolución anulada, o bien que existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.

Lo anterior, para precisar el objetivo del recurso de queja. Es decir, en el recurso de queja quien lo interpone, debe hacerlo al considerar que se ha repetido el acto o resolución anulada o bien, porque estime que existe un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia y, para tal efecto, debe expresar las razones del porqué estima que se incurre en uno u otro supuesto. Por su parte, la resolutoria debe analizar si los argumentos expuestos por el recurrente

² “Artículo 202.-

.... II. Contra los actos de las mismas autoridades, por repetición del acto o resolución anulada o por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada.

En el escrito se expresarán las razones por las que se consideren que existe repetición del acto o resolución anulada, o que existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.”

se actualizan, o sea debe verificar si en el caso existe una repetición del acto o resolución anulada o bien, si existe un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.

Se acota lo anterior, porque en el actual caso, el recurrente afirma que en la resolución del recurso de queja la juzgadora incurre en ilegalidad pues declaró improcedente la queja, estimó cumplida la sentencia por las consideraciones que anotó y decretó el final del procedimiento de ejecución de sentencia ordenando la terminación del expediente como asunto total y definitivamente concluido y la baja de su libro de registro.

Entonces, esta Sala Superior debe analizar si en efecto las cosas se actualizan de esa manera para dar una solución legal.

Ahora, de las constancias que integran los autos del juicio remitidos para la solución del presente asunto y que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 173 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, por tratarse de actuaciones judiciales se tiene lo siguiente:

- a) Sentencia de 29 veintinueve de mayo de 2015 dos mil quince en la que en la parte que interesa, la juzgadora primigenia resolvió: *“...Bajo esta tesitura, esta Juzgadora advierte que la demandada citó entre otras disposiciones legales, para pronunciarse respecto de las peticiones del actor, contenidas en los escrito (sic) recibidos el 5 cinco de octubre de 2012 dos mil doce, mediante los cuales solicitó la renovación de su concesión del servicio público de alquiler (taxi) en la Población de ***** , Oaxaca; el acuerdo publicado el 13 trece de octubre de 2012 dos mil doce, por el que el Secretario de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, delega facultades a los titulares de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Concesiones de la misma dependencia; sin embargo fue omisa en señalar con precisión y exactitud las normas legales que la facultan para emitir el acto impugnado. Lo anterior atendiendo a que el acuerdo delegatorio que cita, está conformado por tres artículos; de donde debió haber señalado la porción normativa exacta, en la que fundamenta su competencia, a efecto de cumplir con la exigencia de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de las autoridades.*

Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO

A partir de ello, es inconcuso, que la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado, soslayó cumplir con la debida fundamentación y motivación en cuanto a su competencia para actuar en el sentido en que lo hizo, en los términos a que obliga las fracciones I y V del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, para la validez de los actos administrativos; de donde resulta su ilegalidad, tomando en consideración que la competencia de la autoridad emisora, es requisito indispensable exigido por el artículo 7 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa invocada, para la validez de todos los actos administrativos, con fundamento en el los diversos 178 fracción I y 179 de la Ley que rige a este Tribunal... Con base en el razonamiento esgrimido y en virtud de que el oficio cuya nulidad se solicita, deriva de una petición formulada por el actor en sede administrativa, que exige un pronunciamiento, lo procedente es decretar la NULIDAD del oficio SEVITRA/DJ/DCAA/3037/2013, de 24 veinticuatro de septiembre de 2013 dos mil trece, PARA EFECTO de que la DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE dicte otro, en el que fundamente y motive debidamente su competencia en los términos que le imponen las fracciones I y V del artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca...” (folios 47 a 49);

- b)** Proveído de 13 trece de julio de 2015 dos mil quince, en el que se decretó ejecutoriada la sentencia y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia (folio 53);
- c)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2069/2015 del Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad Transporte con el cual manifiesta dar cumplimiento a la sentencia descrita en el inciso a) (folio 61);
- d)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/1894/2015 del Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte con el que da cumplimiento a la sentencia de mérito (folios 62 a 64);
- e)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2357/2015 del Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad Transporte con el cual adjunta el oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2147/2015 que dice recayó al cumplimiento de la sentencia de fondo (folio 67);
- f)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2147/2015 del Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte con el que da contestación al actor respecto de la petición formulada relativa a la renovación de su acuerdo de concesión (folios 68 a 71);

- g)** Proveído de 9 nueve de octubre de 2015 dos mil quince en el que la primera instancia ordena reservar los oficios descritos en los incisos c), d), e) y f) virtud que las autoridades demandadas no tienen demostrada su personalidad (folio 73);
- h)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2716/2015 del Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad Transporte con el cual remite el documento relativo a su personalidad (folio 79);
- i)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/22743/2015 del Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte con el que remite el documento relativo a su personalidad (folios 81);
- j)** Proveído de 23 veintitrés de noviembre de 2015 dos mil quince con el que la primera instancia admite la personalidad de las autoridades demandadas y da vista a la parte actora de los oficios detallados en los incisos c), d), e) y f) relativos al cumplimiento de la sentencia (folio 85);
- k)** Escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal el 4 cuatro de enero de 2016 dos mil dieciséis con el que el aquí disconforme contesta la vista apuntada en el inciso anterior y en el que manifiesta que no está conforme con el cumplimiento de la sentencia de mérito, al considerar que el Director de Concesiones no es autoridad competente para resolver su petición (folios 89 a 92);
- l)** Proveído de 10 diez de mayo de 2016 dos mil dieciséis en el que la sala de origen, estimó que en efecto el Director de Concesiones no es competente para resolver la petición de la parte actora e indicó que era competente para tal efecto el Secretario de Vialidad y Transporte por lo que ordenó al Director de Concesiones remitiera la petición de la parte actora al aludido Secretario a fin que resolviera la petición de la parte actora;
- m)** Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2219/2016 signado por el Secretario de Vialidad y Transporte con el que adjunta la resolución de 11 once de agosto de 2016 dos mil dieciséis y en la que resuelve la petición de la parte actora respecto a la renovación de su acuerdo de concesión (folios 107 a114);
- n)** Auto de 6 seis de enero de 2017 dos mil diecisiete en el que la primera instancia da vista a la parte actora respecto al oficio enunciado en el inciso anterior para que se manifieste respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva (folio 1116);
- o)** Escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal el 23 veintitrés de enero de 2017 dos mil diecisiete con el que el actor del juicio natural interpone RECURSO DE QUEJA por defecto en el

cumplimiento de la ejecución de sentencia, pues en síntesis, indica que ésta debe ser cumplida por autoridad competente y afirmando que el Secretario de Vialidad y Transporte no es la autoridad competente para resolver lo relativo al otorgamiento de la renovación de su acuerdo de concesión (folios 125 a 130); y

- p) Resolución de 7 siete de julio de 2017 dos mil diecisiete, hoy impugnada, y en la que decretó improcedente la queja interpuesta al estimar que el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado sí es competente para resolver la petición del actor y al considerar que la resolución de 11 once de agosto de 2016 dos mil dieciséis del referido secretario está debidamente fundada y motivada porque cumple con lo estatuido en el artículo 7 fracciones I y V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca (folios 170 a 173).

(subrayado nuestro)

De los incisos anteriores, es pertinente destacar que la sentencia que puso fin a la controversia planteada a la primera instancia, consistió en: *decretar la NULIDAD del oficio SEVITRA/DJ/DCAA/3037/2013, de 24 veinticuatro de septiembre de 2013 dos mil trece, PARA EFECTO de que la DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE dicte otro, en el que fundamente y motive debidamente su competencia;* esto porque la juzgadora primigenia consideró que era insuficiente que la citada autoridad hubiese fundado su actuación en el Acuerdo publicado el 13 trece de octubre de 2012 dos mil doce en el que el Secretario de Vialidad y Transporte delega facultades a los titulares de la Dirección de Concesiones y la Dirección Jurídica de la citada dependencia, y tal insuficiencia la destacó porque el comentado Acuerdo consta de tres artículos, por lo que la Directora de Concesiones debía señalar exactamente cuál de dichos artículos es el que exactamente sirvió de base para emitir su actuación, de ahí que al haber soslayado su obligación de fundar y motivar debidamente su resolución es que ocasionó la nulidad decretada.

Luego, el sentido en que se emitió la sentencia es únicamente para efecto de que la autoridad que resultó demandada, es decir, la DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO emita una nueva resolución en la que

funde y motive debidamente su competencia. De esta manera, el cumplimiento de la sentencia debe ceñirse a este lineamiento otorgado por la juzgadora de origen por una cuestión de certeza y seguridad jurídica, sin que sea posible la existencia de un pronunciamiento distinto al contenido en la sentencia definitiva.

Esto adquiere relevancia, porque la ejecución de sentencia conlleva el cumplimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual debe asegurar a las partes contendientes la efectividad de las sentencias, por lo que las juzgadoras deben cerciorarse que sus fallos sean acatados por las partes en los términos en que fueron emitidas, sin excesos ni defectos. El cumplimiento excesivo de una sentencia implica que se rebasen los límites o lineamientos establecidos en la sentencia, mientras que el cumplimiento defectuoso significa que la conducta de la autoridad en el cumplimiento es incompleta, implicando carencia en relación con los términos apuntados en la sentencia. De tal manera, que como se precisó en párrafos anteriores el recurso de queja puede ser interpuesto cuando se estima que el cumplimiento de la sentencia es excesivo o defectuoso, tal como lo prevé la norma respectiva. Sirve de apoyo a estos conceptos sobre el cumplimiento excesivo o defectuoso la jurisprudencia I.6o.T. J/64 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, dictada en la novena época, la cual aparece publicada en la página 1672 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a Tomo XX de septiembre de 2004, bajo el rubro y texto siguientes:

“QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. CASOS EN QUE SE SURTE. *El artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la procedencia del recurso de queja cuando la autoridad responsable incurre, al cumplimentar una ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en exceso o defecto. Para entender la hipótesis de aplicación de esta disposición, debemos acudir al contenido del artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, una sentencia concesoria del amparo, debe fijar sus límites y alcances, lo que obliga estrictamente a las autoridades a quienes corresponde el*

cumplimiento de la sentencia. Por tanto, si éstas rebasan los límites o alcances fijados en el mencionado fallo, incurren de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento del fallo en cuestión. En cambio, si al llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia, su conducta es incompleta, implicando carencia o falta en relación con los términos en que se concedió el amparo, la autoridad incurre en defecto en la ejecución del fallo. Lo anterior es así, si se tiene en cuenta que las sentencias pronunciadas en el juicio federal no tienen más efecto, cuando se ampara, que nulificar el acto reclamado, obligando a la autoridad responsable a la reparación de la garantía violada, pero sin que la sentencia de amparo sustituya a la que la motiva, por lo que la forma correcta de ejecutar el fallo constitucional es dictar uno nuevo que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo. Luego, la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, únicamente debe ajustarse a los puntos resueltos en aquélla, respecto de las cuestiones que fueron materia de la litis constitucional, sin que quede vinculada a resolver en algún sentido, en relación con los aspectos que no se estudiaron en el amparo.”

Todo esto, porque la resolución alzada versa sobre la consideración que la sala de origen hizo en relación con el recurso de queja que el aquí disconforme planteó debido a que consideraba que el cumplimiento de la demandada es defectuoso ya que en su apreciación el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado es incompetente para contestar su petición de otorgamiento de renovación de su acuerdo de concesión para la prestación del servicio público de alquiler (taxi). De donde se tiene que la primera instancia, debía, al resolver la queja interpuesta, analizar su procedencia y para ello debía indicar si en efecto se actualizaba el defecto denunciado por la parte actora.

En este sentido, es prudente reiterar el efecto de la sentencia, misma que quedó firme al no haber sido impugnada por las partes y por tanto se asume su conformidad tácita con las consideraciones que la sostienen y, que esencialmente consiste en que se decretó la **NULIDAD** del oficio SEVITRA/DJ/DCAA/3037/2013, de 24 veinticuatro de septiembre de 2013 dos mil trece, **PARA EFECTO** de que la **DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE** dicte otro, en el que fundamente y motive debidamente su competencia; de esta manera el análisis sobre el cumplimiento de la sentencia en este caso debe ser la de verificar si la

DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE ha fundado y motivado debidamente su competencia, y para esto era necesario que esa autoridad administrativa verificara las razones que la sala de origen estimó para decretar la nulidad, y que básicamente consisten en que la fundamentación que hizo era indebida porque sólo señaló como fundamento un acuerdo delegatorio publicado el 13 trece de octubre de 2012 dos mil doce, pero no precisó cuál de los tres artículos que componen dicho acuerdo es el que le dota de competencia.

Entonces, si la omisión en precisar con exactitud la porción normativa del Acuerdo Delegatorio de 13 trece de octubre de 2012 dos mil doce es lo que la juzgadora primigenia detectó como la ilegalidad del acto combatido y por ello decretó una nulidad para efecto de que la enjuiciada subsanara tal omisión emitiendo una nueva resolución fundando y motivando debidamente su competencia, es claro que esta manera de cumplir es lo que debía analizar la sala de origen y, en todo caso, ante el defecto alegado con la interposición del recurso de queja, revisar si el cumplimiento a la luz de los lineamiento de la sentencia fue defectuoso o no.

Se acota lo anterior, porque el argumento de la parte actora con la interposición de la queja en la que afirma que el cumplimiento es defectuoso plantea que no se puede tener por cumplida la sentencia de mérito porque en la resolución de 11 once de agosto de 2016 dos mil dieciséis el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado resolvió que no ha lugar a otorgar la renovación de su concesión y que el defecto consiste en que dicha determinación es ilegal porque el Secretario mencionado es incompetente para resolver tal petición. Además que sostiene que en la sentencia se precisó que debía resolverse su petición y que dicha resolución debía ser cumplida por autoridad competente. **Así las cosas**, el recurrente plantea un cumplimiento defectuoso de la sentencia esgrimiendo un agravio que parte de una afirmación falsa. Porque como se ha señalado en líneas precedentes en la sentencia *definitiva* sólo se acotó que la DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE debe emitir un acto nuevo fundando y motivando debidamente su competencia, **sin** que sea posible interpretar que ese efecto alcanza a

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

que debe emitirse un acto nuevo por una autoridad diversa a la demandada en el que se resuelva sobre la renovación del acuerdo de concesión del disconforme.

En tal sentido, es incorrecto que el hoy disconforme haya planteado el recurso de queja indicando un cumplimiento de sentencia defectuoso porque considera que el Secretario de Vialidad y Transporte es incompetente para resolver sobre la renovación de su concesión, porque este no es el sentido ni efecto decretado en la sentencia final y, en todo caso, debía precisar, si la enjuiciada DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE había faltado a la obligación a que fue constreñida en el fallo protector y que era la de emitir una nueva resolución en que fundara y motivara debidamente su competencia. Se *insiste*, el recurso de queja sólo debe verificar que los alcances impuestos en la sentencia se cumplan, sin exceso ni defecto, más no es viable analizar ilegalidades planteadas en la nueva actuación de la condenada, porque esa no es la naturaleza del citado recurso. Estas últimas consideraciones encuentran apoyo por analogía en el tema en la jurisprudencia VI.2o.C. J/330 (9a.) de la Décima época, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, la cual es consultable a página 1574, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a Libro I de octubre de 2011, Tomo 3 bajo el rubro y texto del tenor literal siguiente:

Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO

“QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE CONCEDIÓ ÚNICAMENTE PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTUDIARA DETERMINADOS AGRAVIOS, NO PUEDE ANALIZARSE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES QUE, EN CUMPLIMIENTO DE DICHA EJECUTORIA, DIERON RESPUESTA A ESOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Cuando en una sentencia de amparo se concede la protección constitucional únicamente para el efecto de que la autoridad responsable analice agravios cuyo estudio indebidamente omitió, en el recurso de queja formulado por exceso o defecto en el cumplimiento a dicha ejecutoria sólo puede analizarse si efectivamente se dio respuesta a tales motivos de inconformidad, pero no la legalidad de las consideraciones sostenidas para tal efecto, pues esto integraría una diversa infracción legal que no puede ser objeto de este medio de defensa.”

En estas consideraciones, el recurso de revisión aquí intentado está encaminado a indicar que es ilegal la determinación de la primera instancia que decretó improcedente el recurso de queja interpuesto por ***** al considerar defecto en el cumplimiento de la sentencia porque el Secretario de Vialidad y Transporte es incompetente para resolver la petición de renovación de concesión y, los motivos de disenso aquí expuestos están dirigidos a demostrar la ilegalidad de la resolución alzada basándose, nuevamente, en los argumentos de que el Secretario de Vialidad y Transporte es incompetente para resolver la petición de renovación de concesión y que la primera instancia, ilegalmente consideró que dicho servidor público sí es competente para atender la petición del actor. **No obstante,** los agravios apuntados en esta instancia, esta Superioridad no puede soslayar el hecho de que desde el planteamiento del recurso de queja hay un yerro, porque al aquí recurrente parte de una afirmación falsa para sostener el defecto del cumplimiento (que el Secretario de Vialidad y Transporte es incompetente para resolver la petición de renovación de concesión), debido a que como se ha precisado reiteradamente en la actual resolución, el efecto de la sentencia no es que se emita un acto nuevo por una autoridad diversa a la demandada en el que se resuelva sobre la renovación del acuerdo de concesión del disconforme, sino que la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte emita un nuevo acto en el que funde y motive debidamente su competencia.

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

En esta guisa, el aquí recurrente ante esta Superioridad estaba en la obligación de demostrar que la improcedencia decretada por la sala de origen es ilegal porque en efecto, el cumplimiento de la sentencia estaba defectuoso porque *la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte no emitió un acto nuevo fundando y motivando debidamente su competencia,* y no, aducir ilegalidad en la determinación de improcedencia del recurso de queja porque una autoridad que no fue demandada, como lo es el Secretario de Vialidad y Transporte no es competente para resolver su petición de renovación de concesión. Esto, porque el planteamiento del recurso de queja parte de una afirmación falsa y ello conlleva a que el planteamiento del recurso de revisión bajo las mismas consideraciones también sea falso

y por ende, se impida la emisión de una resolución eficaz, se *insiste* a partir de un planteamiento falso. Y, al no haberlo hecho de esa manera, sus alegaciones son **inoperantes** porque pretenden obtener un fallo favorable a partir de un esbozo falso, pues intenta que se decrete el cumplimiento defectuoso de la sentencia a partir de indicar un efecto que no fue impuesto en el fallo definitivo. Sirve de apoyo a estas consideraciones la jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/5 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito pronunciada en la Décima época y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a Libro 14 de Enero de 2015, Tomo II en la página 1605, bajo el rubro y texto siguientes:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes.”

En este punto, se acota, que al análisis de las constancias judiciales y como se describió en el inciso l) de esta resolución, esta Superioridad advierte que la sala de primera instancia indebidamente vinculó al Secretario de Vialidad y Transporte al cumplimiento de la sentencia pues en proveído de 10 diez de mayo de 2016 dos mil dieciséis indicó que la Director de Concesiones carece de competencia para negar la renovación de la concesión del actor del juicio, y con ello, hizo un pronunciamiento distinto al de la sentencia, con lo que violentó los principios de certeza y seguridad jurídica que deben imperar en la firmeza de las sentencias y ello acarreó la continuación de la incorrecta inconformidad de la parte actora, tanto en el recurso de queja, como en el presente recurso de revisión. Y, se apunta que esta Superioridad estaba imposibilitada de hacer notar esta imprecisión de la sala de origen y tuvo que esperar hasta que una de las partes se inconformara en contra de la resolución que pone fin al procedimiento de ejecución

de sentencia para señalar que no debe vincularse al referido Secretario de Vialidad y Transporte al cumplimiento de la sentencia, porque tal situación se aparta de las consideraciones contenidas en el fallo definitivo.

Por todo lo anterior, se declaran ineficaces los agravios expuestos virtud que están encaminados a controvertir una improcedencia del recurso de queja a partir de una afirmación falsa y diversa de las consideraciones del fallo definitivo, sin que alcancen a demostrar ilegalidad en la resolución alzada, porque no logran demostrar que contrario a la determinación de la juzgadora primigenia existe un defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva y que por tanto era procedente la queja interpuesta.

Así, se confirma la decisión de la primera instancia que decretó improcedente la queja, pero por las razones apuntadas por esta Superioridad y que se hacen consistir en que la sentencia definitiva condenó a la DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE para que emita un acto nuevo fundando y motivando debidamente su competencia, por lo que el defecto planteado por la incompetencia del Secretario de Vialidad y Transporte para atender la petición de renovación del acuerdo de concesión de *****, no guarda relación con lo resuelto con el fallo definitivo y por tanto no demuestra el defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva. **Más**, como se ha precisado que el análisis de la juzgadora primigenia fue errado a partir de un planteamiento errado, pues analizó la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte para negar la renovación del acuerdo de concesión de la parte actora, circunstancia ésta, que se reitera, **no fue la consideración que sostiene el fallo**, debe entonces, analizar si con el cumplimiento de la demandada se ha colmado el efecto verdadero de la sentencia, y con ello se agotará, como se apuntó en líneas precedentes, la impartición de justicia completa y la tutela jurisdiccional efectiva, protegida por el artículo 17 Constitucional.

En consonancia con lo anterior, se constriñe a la primera instancia **primero**, a que verifique si realmente se ha cumplido con los lineamientos de la sentencia, es decir, que revise si la DIRECTORA DE

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO

CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE emitió un acto nuevo fundando y motivando debidamente su competencia y **segundo**, para que se abstenga de variar las consideraciones de las sentencias definitivas, como acontece en el actual caso, vinculando erradamente a autoridades que no son parte en el juicio, y por tanto no han sido ni oídas ni vencidas en juicio, menos aún juzgadas; pues ello se aparta de los principios de certeza y seguridad jurídica que deben guardar las sentencias; produce confusiones en el cumplimiento de las sentencias y retarda el cumplimiento de las ejecutorias.

En consecuencia, por las anotadas consideraciones con fundamento en los artículos 207 y 208 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **CONFIRMA** únicamente la decisión de declarar improcedente el recurso de queja interpuesto, debiendo la sala de origen pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia, ciñéndose a las reales consideraciones de la misma, en los términos apuntados en el considerando que antecede.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, con copia certificada de la presente resolución, vuelvan las constancias remitidas a la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia, y en su oportunidad archívese el cuaderno de revisión como concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, quienes actúan con la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, que autoriza y da fe.

MAGISTRADA MARÍA ELENA VILLA DE JARQUÍN.
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

MAGISTRADO HUGO VILLEGAS AQUINO.

MAGISTRADO ADRIÁN QUIROGA AVENDAÑO.

MAGISTRADO ENRIQUE PACHECO MARTÍNEZ.

LICENCIADA SANDRA PÉREZ CRUZ.
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS.

Datos personales
protegidos por el Art.
116 de la LGTAIP y el
Art. 56 de la LTAIPEO